

La rebelión de la nación Aymara

Por Alvaro García Linera

El 5 de Agosto de 1781, después de varios meses de cerco indígena y del apoyo de los mineros de Ananea que construyeron una represa para inundar el pueblo, Sorata caía en manos de los ejércitos indígenas encabezados por Bartolina Sisa y el joven Andrés Tupac Amaru. 222 años después, desde el 19 de septiembre del 2003, Sorata es nuevamente ocupada por indígenas insurgentes como un eslabón más de un nuevo ciclo de rebelión indígena que desde hace 3 años atrás viene reapropiándose de territorios aymara, expulsando funcionarios estatales y reconstruyendo un tipo de poder político comunal basado en los ayllus y sindicatos. Los repertorios de la movilización india no han variado mucho respecto a los siglos anteriores; al igual que hace 100 años o 200, el asedio a las ciudades, el control de la topografía, el manejo dilatado del tiempo, la fuerza de masa y la superioridad numérica como técnica militar, la confederación de milicias comunales y la obstrucción de las vías de comunicación entre ciudades forman parte de la memoria de guerra que regula los planes tácticos con los que los indígenas contemporáneos se enfrentan al Estado. Lo nuevo hoy quizá este por el lado de la subordinación de ciertas instituciones estatales y de sus recursos (municipios y diputados parlamentarios) a la lógica de la acción colectiva comunal.

Pero también hay la reactivación de la memoria de una especie de parentesco ampliado entre aymaras de todas partes que, sin haberse conocido, se sienten partícipes de una misma historia, de un mismo sufrimiento y un mismo destino. En el fondo, a esto es lo que suele llamarse una nación, y es lo que puso en pie Tupac Katari en 1781, y luego la rebelión de los Willkas en 1899, y ahora, es lo que une en el bloqueo y lo que teje un sentimiento colectivo de hermandad en luto por los muertos de Warisata a comunarios de Moco Moco, de Puesto Acosta, de Ilabaya, de Achacachi, de Huarina, de Peñas, de Tacamara, de Vilaque, de Sapahaque, de Konani, de Viacha, de Palca, de los barrios urbanos de el Alto y de los mercados de La Paz.

Nuevamente hoy La Paz ha sido cercada por miles de indígenas aymaras que, en estado de rebelión general, se oponen a la venta del gas por Chile, para Chile y hacia Estados Unidos.

Warisata, la escuela-ayllu ensangrentada

¿Qué es lo que ha llevado a que los indígenas aymaras se preocupen por el gas? ¿Por qué la oposición a su exportación por puertos chilenos ha llegado hasta el extremo de correr el riesgo de ser perseguidos, encarcelados, heridos como lo que hoy sucede con comunarios de Lahuachaca, de Patamanta, de Laja, o de ser asesinados como en warisata o Ilabaya? ¿Por qué los indígenas, urbanos y rurales son los más activos, los más movilizados y los que están a la vanguardia en la defensa de los recursos naturales en general, y de los recursos hidrocarburíferos en particular?

El levantamiento indígena y popular de abril y septiembre del 2000 en contra de la privatización de los recursos hídricos en los valles cochabambinos y el altiplano aymara mostró que los recursos naturales forman parte fundamental del sistema de reproducción cultural y material de las comunidades agrarias y, por tanto, cualquier intento de mercantilización de expropiación privada de esos recursos colectivos ataca directamente la estructura material y simbólica de las comunidades campesinas indígenas. Esto hace de la defensa y control colectivo de ciertos recursos naturales un principio básico de la preservación histórica y de la continuidad del régimen social de las comunidades. El gas es un recurso natural depositado en las entrañas de la tierra y, por tanto, integrante del conjunto de riquezas, de fuerzas y poderes que sostienen la persistencia de las comunidades. Esto no impide que se utilice esos recursos para satisfacer necesidades humanas, pero ello requiere una relación pactada y negociada entre comunidad y fuerzas de la naturaleza. El régimen de la "qorpa" (y luego del juqueo), mediante el cual los indios trabajaban en las minas coloniales y republicanas sólo si ellos se quedaban con un pedazo del mineral (1), muestra hasta qué punto la modernidad industrial no ha hecho desaparecer el vínculo orgánico y pactado entre naturaleza y comunidad en el altiplano, los valles y las zonas bajas del país.

Pero también en el mundo indígena hay una memoria fresca del vínculo histórico entre

comunidad e hidrocarburos.

Allí donde tropas especiales antiterroristas del ejército boliviano entraron a disparar contra indios aymaras como si de ejércitos invasores se tratara, en Warisata, hace 70 años los padres y abuelos de los comunarios hoy asesinados y perseguidos se enrolaban voluntariamente para ir al Chaco a defender el territorio y los recursos petroleros que hoy se quiere entregar a empresas extranjeras. Elizardo Perez, uno de los miembros fundadores de la escuela ayllu de Warisata relata como es que presencio "un espectáculo nunca antes visto en nuestra historia republicana. Los indios presentándose a un puesto militar, para entregar espontáneamente a sus hijos al sacrificio patrio." (2).

La defensa del Chaco produjo más de 50.000 bajas, la mayoría de ellos indígenas y de sectores populares urbanos. 30% de los indios colonos y comunarios comprendidos entre los 19 y 36 años del altiplano y valles fueron enrolados en la tropa y una buena parte del abastecimiento del ejército en el frente y la retaguardia estuvo a cargo de donativos de comunidades indígenas que, a la cabeza de los caciques, entregaban sus productos a los centros de acopio de las ciudades (3). No es de sorprenderse entonces que hoy los pueblos indígenas del occidente se sientan con un derecho conquistado de participar, junto con otros sectores sociales, en la toma de decisiones sobre la exportación del gas que existe en territorio tarijeño.

Por ultimo y no menos importante, está claro también que en la movilización indígena y popular contra la exportación del gas, se está produciendo todo un referéndum activo acerca del papel de la inversión extranjera en el país.

Durante década y media, las elites políticas, la intelectualidad cortesana y organismos financieros externos, difundieron, con relativo éxito publicitario, la ideología de que la inversión extranjera, con la capitalización como punto de partida, iba a encaminar al país al sendero de la modernidad, el crecimiento económico y el bienestar. El actual presidente que hoy ya tiene en su haber más de 60 muertos civiles por conflictos sociales, legitimó su euforia privatizadora con la oferta de 500.000 empleos y un crecimiento del 10% anual de la economía. 7 años después, la economía se ha hundido en un largo periodo de estancamiento, recesión, desempleo masivo y descapitalización nacional. La defensa del gas es, a su modo, un plebiscito movlizado en contra de un esquema que ha entregado la conducción económica a la inversión extranjera. La gente en las calles y las carreteras, los indígenas y profesores de Warisata comprenden por experiencia propia de los últimos años, que la transnacionalización de la economía no le va a redituvar ningún beneficio, al contrario, hay toda una intuición colectiva de que dejando el negocio del gas bajo propiedad de empresas extranjeras, se perderá quizá la ultima oportunidad de aprovechar las riquezas públicas (porque el gas es una riqueza pública), para beneficio de aquellos que son los dueños originarios de estos territorios.

El Desplazamiento del Estado

Pero el levantamiento indígena aymara no es sólo un referéndum activo en contra de la exportación del gas en las actuales condiciones de propiedad extranjera del negocio, es también un referéndum masivo que está demostrando la imposibilidad de continuar pacíficamente la permanencia de un tipo de estado republicano monocultural, colonialista y excluyente de las identidades indígenas.

Bolivia es un país de presencia mayoritaria indígena, pero todas sus instituciones y sus estructuras estatales hacen todo lo posible para desconocer al indio, para denigrarlo, para excluirlo y, como ahora en Warisata, para exterminarlo. No deja de ser paradójico que aquellos mismos oficiales mestizos que enseñan a patadas el castellano a los conscriptos indígenas, que desvisten indios en las carreteras para humillarlos, que utilizan miras telescópicas para "cazar" indígenas que en los cerros se oponen a la venta del gas por Chile y que disparan contra escuelas, normales y niñas de 9 años, sean los que han hecho jurar a esos mismos indígenas en los cuarteles, a enfrentar al Estado chileno causante del cercenamiento territorial. Se trata de una centenaria esquizofrenia estatal de elites mediocres y acomplejadas que se asumen como blancas, liberales y modernas, siendo que en realidad el país es eminentemente indígena, de cultura comunitaria y de bases productivas tradicionales.

Y por tanto no es raro que los indios, esencialmente los aymaras, se reconozcan como otro

pueblo, como otra nación y hayan emprendido desde tiempo atrás toda una estrategia práctica de reapropiación política y simbólica del territorio para consolidar formas de autogobierno indígena.

No es casual la formación en los últimos años de una joven elite intelectual aymara portadora de un discurso de autonomía indígena en cargos de dirección de comunidades y ayllus de todo el altiplano, desde Potosí, Oruro y, principalmente La Paz. No es casual la inestabilidad de la mayoría de los municipios del altiplano paceño por la presión y fuerza de la lógica organizativa comunal que se sobrepone a los partidos y que ha llegado a subordinar a las alcaldías. Igualmente, no deja de ser revelador que, desde hace 3 años atrás, se esté procediendo a una sistemática expulsión de las otras instituciones estatales (subprefecturas, puestos policías, registros civiles) en las provincias del norte aymara, y su sustitución, en los hechos, por la autoridad de las federaciones provinciales, por las centrales y subcentrales, por los Mallkus, Jilakatas y Mamat'allas. Esto que aconteció en Achacachi en abril del año 2000, se ha expandido a pueblos de Muñecas, Bautista Saavedra, Manco Cápac y, recientemente a Sorata.

La racialización de un Estado republicano que vive del trabajo y la riqueza de los indios pero que los desprecia y los excluye de derechos, está dando lugar a la construcción de facto de otro tipo de ciudadanía y de poder indígena asentado en estructuras sindicales y comunitarias capaz no sólo de disputar la legitimidad gubernamental sino incluso, ya en estos últimos meses, de interpelar el propio poder militar, que es el fondo primario y último de la presencia de cualquier estado.

La formación del cuartel indígena de Qalachaca en junio del 2001 con sus 40.000 aymaras confederados por comunidad en estado de militarización, la presencia en los cerros cercanos a los pueblos y carreteras de miles de comunarios con chicotes, piedras, dinamita y fusiles mauser gritando "guerra civil", el reciente cerco y recuperación a manos de las tropas indígenas del Cuartel de Rojorojoni y Qalachaca por miles de indígenas de las comunidades aledañas, ocupado al momento de la masacre de Warisata por las tropas del ejército republicano, hablan de una conflictividad entre Estado e indígenas aymaras que se inclinan lentamente a entrar en una etapa de confrontación bélica, como un nuevo momento complementario de lo que es ya una creciente construcción de redes de poder cultural, discursiva, simbólica, organizativa y política indígena en varias provincias del altiplano. A esto es lo que se puede llamar en sentido estricto una rebelión indígena, de la que los recientes sucesos, son un episodio más de una larga historia.

"Que los q'aras también mueran de hambre"

Esa fue la frase de una vendedora de verduras del mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, al momento de explicar a sus compañeras de trabajo por qué cerraban los puestos de abasto en solidaridad con sus hermanos del altiplano.

Esto comienza a mostrar que la ciudad, el mundo urbano popular, hasta ahora distante del discurso indianizante y de la convocatoria de movilización de las federaciones campesinas, ha comenzado a ser integrada en el ámbito de irradiación discursiva del movimiento indígena, dando un giro radical a la construcción de alianzas de la rebelión.

En el año 2000, septiembre, junto a los aymaras campesinos, estuvieron los transportistas y los maestros rurales. Tres años después, además de ellos, están pequeños comerciantes, vendedoras de la ciudad, indígenas antiguamente adheridas a Condepa, y que hoy comienzan a participar de la convocatoria de los indígenas del campo. El Alto, por su parte, la ciudad eminentemente aymara, con sus propias demandas, su temporalidad y sus formas organizativas que mantienen su autonomía frente a la CSUTCB, han sido partícipes de grandes movilizaciones, contra la alcaldía primero y luego contra la venta del gas. De hecho, el éxito de la marcha del viernes 19 de septiembre se debió básicamente a la presencia de los/las aymaras urbanas de El Alto, que ocuparon la plaza San Francisco con sus polleras y sus Wiphalas.

Son ahora estos aymaras urbanos movilizados, los que también comienzan a reapropiarse de las consignas y la radicalidad de los aymaras del campo y, de hecho, son los que han salido a proteger a sus hermanos en huelga de hambre en la radio San Gabriel, apenas circuló el rumor de una posible intervención policial.

En los hechos, esta nueva etapa de la rebelión aymara, al tiempo de caracterizarse por la creciente radicalización de las consignas y la estructuras de movilización (basta leer los

comunicados de federaciones provinciales y los discursos en aymara de los dirigentes intermedios para notar la construcción de un tipo de lenguaje de militarización comunal), también viene construyendo nuevos puentes de encuentro entre indígenas de la ciudad e indígenas del campo, abriendo posibilidades a una ampliación de la base social del discurso de autogobierno indígena y a la reinención de las fronteras étnicas en la propia ciudad de La Paz y El Alto.

La indianización de Bolivia.

Independientemente de cuáles sean los resultados de las negociaciones entre gobierno y dirección del movimiento social indígena encabezado por la CSUTCB, lo claro es que la demanda indígena de igualdad de derechos culturales, de reconocimiento y de participación en la toma de decisiones sobre el destino del país, marcará el escenario de las futuras luchas sociales.

Así como las elecciones del 2002 mostraron que a futuro ya no puede haber política partidaria sin tomar en cuenta como fuerza fundamental de construcción de mayoría electoral a los candidatos indígenas, los bloqueos del 2000 y el 2003 muestran de manera inapelable que es imposible construir estabilidad política, legitimidad y orden estatal sin tomar en cuenta el reconocimiento de las identidades culturales indígenas mayoritarias, sus estructuras de poder y su apetencia de autogobierno. Los indios son hoy el núcleo de las luchas sociales, del discurso de cambio y de las fuerzas de renovación moral e intelectual del país.

La única manera sensata e históricamente justa de resolver esa demanda es mediante la transformación del Estado republicano capaz de sincerarlo con la realidad social. Es ya inviable a corto plazo un estado monocultural y colonial como el que existe hasta hoy, así como es inviable un tipo de economía en la que la propiedad de la riqueza esté en manos de diminutas elites extranjeras y extranjerizantes.

Se tiene que modificar el patrón de desarrollo económico dando lugar a una reapropiación de todo, o una parte sustancial, de la riqueza colectiva, especialmente hidrocarburos, en manos del Estado y la sociedad que quiere controlar directamente, el uso, el destino y la propiedad de una riqueza que les pertenece. Eludir esta temática en el debate contemporáneo es simplemente una manera de atizar el fuego del conflicto y el enfrentamiento pues, en el fondo, las luchas sociales son luchas por el control de los excedentes económico de los que dispone el país.

Pero además, sólo un desmontamiento de las estructuras coloniales que segmentan el mercado de trabajo por identidad cultural, que discriminan idiomas en las instituciones públicas y que desconocen la realidad de los sistemas comunales y corporativos de participación democrática de la sociedad, puede permitir una re-articulación de las varias bolivias que hoy habitan el país. Los aymaras, con sus prácticas y sus ideas, con sus esfuerzos y sus demandas nos están mostrando que un pacto de convivencia entre los habitantes de Bolivia podría lograrse mediante una transformación multinacional del Estado, a fin de que todas las identidades culturales, todas las naciones y pueblos indígenas formen parte del sistema de derechos políticos con los que se conforma los sistemas macro, superiores de la organización institucional del estado. Esto supone avanzar en un tipo de democracia multinacional en la que junto con formas de autogobierno regional por identidad cultural o lingüística, en el ámbito superior se estructure un tipo de representación proporcional de todas las culturas e identidades indígenas y no indígenas en las instituciones supremas de toma de decisión del país.

Pero además, y esta es la principal lección del levantamiento indígena, la ampliación de la práctica democrática en la construcción de sistemas de gobierno estables, pasa por la consagración y reconocimiento de formas comunales, sindicales y gremiales de deliberación, de elección y de toma de decisiones, tanto a nivel local, regional como a nivel general, "nacional". La democracia del sindicato y del ayllu es un tipo de práctica organizativa sin cuya presencia hoy es imposible tomar decisiones que tengan legitimidad social. Bolivia vive no sólo una dualidad cultural-nacional, sino también una dualidad institucional y organizativa y los esfuerzos por imponer el molde organizativo liberal como única manera de consulta y decisión a nivel superior del estado, llevará el sello de la fractura y la parcialidad de una parte de la vida social.

Todo indica entonces que hacia delante, la única manera estable y consensuada de

mantener unido al país y de ampliar su base democrática pasa inevitablemente por una reindianización de la sociedad boliviana.

1. E. Tandeter, Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí colonial, CERA, Cusco, 1992.
2. Elizardo Perez, warisata, la escuela ayllu, La paz, 1962
3. R. D. Arze Aguirre, Guerra y conflictos sociales. El caso rural boliviano durante la campaña del Chaco, CERES, La Paz, 1987.